

REPÚBLICA DE COLOMBIA  
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO



JUZGADO TREINTA DE FAMILIA

Bogotá D. C., treinta (30) de octubre de dos mil veinte (2020)

Rad: 11001-31-100-30-2020-00376-00

Clase de proceso: Acción de Tutela

Procede este Despacho a proferir sentencia dentro de la Acción de Tutela instaurada a nombre propio por el ciudadano **ISIDRO OLAYA** identificado con la C.C 93.348.538 contra la **UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN - UNP** y el **COMITÉ DE EVALUACIÓN DE RIESGO Y RECOMENDACIÓN DE MEDIDAS – CERREM**.

**ANTECEDENTES**

El ciudadano **ISIDRO OLAYA** identificado con la C.C 93.348.538, quien actúa a nombre propio, inicia acción de tutela contra la **UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN - UNP** y el **COMITÉ DE EVALUACIÓN DE RIESGO Y RECOMENDACIÓN DE MEDIDAS – CERREM**, por considerar que se le está vulnerando el **DERECHO FUNDAMENTAL A LA VIDA, LOCOMOCIÓN, SEGURIDAD PERSONAL DE LIDERES SOCIALES**.

**HECHOS Y PRETENSIONES**

Manifiesta ser líder social (Secretario Departamental de Derechos Humanos de ASTRACATOL, subdirectiva ASTRASAN –Asociación de Trabajadores Campesinos de San Antonio, Tolima).

Que desde el mes de marzo de año 2014 la UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN – UNP le asigno un esquema de protección debido al ataque con arma de fuego que sufrió el 21 de febrero de 2014 por actores desconocidos, dejándole secuelas en su organismo además de la afectación psicológica.

Refiere que inicialmente el esquema asignado era considerado por la UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN – UNP como emergente, constando de un chaleco, un teléfono celular, un hombre de protección y un subsidio de movilidad; para el mes de octubre de 2014, en una valoración de riesgo se determina que es extraordinario y modifica el esquema asignando un vehículo, dos hombres de protección, chaleco y

teléfono celular; en la última valoración se mantiene el riesgo como extraordinario, pero al no haber amenazas de grupos al margen de la ley reconocidos por el estado y además al no haber elevado denuncia ante los entes competentes, deciden desmontar el esquema de seguridad gradualmente dejando un hombre de protección, un chaleco y un teléfono celular; poniendo en riesgo su seguridad, su integridad personal, su vida y la de su hombre de protección; debe restringir su movilidad y limitar sus actividades como líder social.

Señala que el 06 de octubre, el hombre de protección que estaba a su lado, le manifestó que lo habían llamado de la **UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN – UNP** indicándole que debía presentarse en la oficina central de Ibagué, pues le habían desmontado en su totalidad el esquema de protección, sin previa notificación dejándolo en un estado de indefensión y poniendo en riesgo su integridad.

Indica que debido a dicha situación se dirigió a la personería a exponer su situación y el funcionario que lo atendió encontró que el esquema de seguridad asignado estaba vigente y era el inicialmente dado a saber dos hombres de seguridad, un vehiculó, chaleco, celular.

En razón a lo anterior pretende que el Juzgado tutele el **DERECHO FUNDAMENTAL A LA VIDA, LOCOMOCIÓN, SEGURIDAD PERSONAL DE LIDERES SOCIALES** y se ordene dejar sin efecto la Resolución No. 00009393 de 2019 mediante la cual la **UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN – UNP** resolvió lo siguiente: “Artículo 1. *Adoptar las recomendaciones emitidas por el Comité de Evaluación del Riesgo y Recomendaciones de Medidas – CEREM. Artículo 3. En caso de tener medidas de protección por parte de la UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN – UNP, proceder a su finalización de inmediato, en virtud del numeral 18, artículo 2.4.1.2.3 y el numeral 1, artículo 2.4.1.2.4.6 del Decreto No. 1066 de 2015. Artículo 4. En caso de contar con otras medidas de protección diferentes a las finalizadas con el presente acto administrativo, proceder a su ajuste o finalización de acuerdo con las recomendaciones hechas por el CEREM*”; ordenándose restablecer las medidas de seguridad que tenía asignadas.

### **PRUEBAS**

La parte accionante anexa a su solicitud, los siguientes documentos:

- Certificación expedida por la Asociación de Trabajadores Campesinas del Tolima – ASTRACATOL- del 18 de agosto de 2020.
- Epicrisis Unidad de Cuidado Intensivo Adulto Meintegral SAS Chaparral
- Informe Pericial de Clínica Forense expedido por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses.
- Escrito del 26 de febrero de 2014 “Comunicado a la Comunidad Chaparraluna”.
- Acta de entrega de esquema de protección.

- Recurso de reposición contra la Resolución 00009393 de 2019.
- Fotografías Frente Ismael Ruiz – Autodefensas Gaitanista de Colombia.

La **UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN –UNP** allego (relevante para la resolución de la acción):

- Resolución 00009393 de 2019 “por medio de la cual se adoptan las decisiones pertinentes conforme a las deliberaciones hechas por parte del Comité de Evaluaciones de Riesgo y Recomendaciones de Medidas - CERREM”.
- Resolución 02047 de 2020 “por medio de la cual se resuelve un recurso de reposición”.

### **ACTUACIÓN PROCESAL**

- 1.- Admitida la tutela el 19 de octubre de 2020, se ordenó la notificación de la **UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN –UNP, MINISTERIO DEL INTERIOR – COMITÉ DE EVALUACIÓN DE RIESGO Y RECOMENDACIÓN DE MEDIDAS CERREM**, para que en el término de dos (2) días se pronunciaran sobre los hechos materia de la presente acción.
- 2.- El 20 de agosto de 2020, se notificó a la **UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN – UNP, MINISTERIO DEL INTERIOR – COMITÉ DE EVALUACIÓN DE RIESGO Y RECOMENDACIÓN DE MEDIDAS CERREM**, a través del correo institucional del Juzgado, informando sobre la admisión de la presente tutela, adjuntando copia de la referida solicitud.
- 3.- La **UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN –UNP, MINISTERIO DEL INTERIOR – COMITÉ DE EVALUACIÓN DE RIESGO Y RECOMENDACIÓN DE MEDIDAS CERREM**, brindó contestación a la acción constitucional dentro de la oportunidad conferida.

### **CONTESTACIÓN MINISTERIO DEL INTERIOR – COMITÉ DE EVALUACIÓN DE RIESGO Y RECOMENDACIÓN DE MEDIDAS CERREM.**

La entidad accionada, refirió: “(...) Solicitó que se declare a favor de este Ministerio la existencia de falta de legitimación material en la causa por pasiva, por cuanto no existe nexo de causalidad entre la presunta vulneración de los derechos fundamentales invocados por la parte actora y la acción u omisión por parte de este Ministerio, por lo que la presente tutela se torna improcedente en contra de este.

Sobre el particular, cabe precisar, que el Decreto Ley 2893 de 2011, en su artículo 2, subrogado por el artículo 2 del Decreto 1140 de 2018, establece las funciones del Ministerio del Interior, así:

(...)

Así las cosas, es evidente que no existe nexo de causalidad entre la presunta vulneración de los derechos fundamentales invocados por el accionante y la acción u omisión por parte de este Ministerio”

## **CONTESTACIÓN UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN –UNP.**

“No es la acción de tutela el mecanismo idóneo para acceder a la pretensión elevada puesto que, como se logró demostrar, la finalización de las medidas de protección del señor Isidro Olaya Vásquez obedeció al resultado de Unidad Nacional de su estudio de nivel de riesgo el cual ponderó ordinario, la decisión fue debidamente notificada y el recurso de reposición oportunamente atendido”.

## **CONSIDERACIONES**

### **Aspectos preliminares**

Este Juzgado es competente para conocer de la presente acción, por mandato de los artículos 86 de la Constitución Nacional, 37 del Decreto 2591 de 1991; numeral 1°, inciso 2°, del Decreto 1382 de 2000; y 38 de la Ley 489 de 1998.

La solicitud satisface las formalidades legales y no se advierten anomalías que invaliden lo actuado, lo cual habilita al Despacho para decidir de fondo el asunto.

### **Naturaleza jurídica de la acción de tutela**

La jurisprudencia constitucional ha pregonado de antaño que la acción de tutela fue instituida como un mecanismo extraordinario para la protección inmediata de los derechos fundamentales de las personas, frente a la amenaza o violación que pueda derivarse de la acción u omisión de las autoridades públicas o de los particulares, en los casos previstos en la ley, sin que pueda erigirse en una vía sustitutiva de los medios ordinarios de defensa que el ordenamiento jurídico ha consagrado para salvaguardarlos.

Es claro, entonces, que este instrumento judicial se torna improcedente cuando la persona afectada tuvo o tiene la oportunidad de obtener la protección del derecho que

estima amenazado, por los cauces ordinarios y ante las autoridades competentes, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

### **Procedencia de la acción de tutela.**

El art. 86 de la Constitución Política de Colombia, dispone: *“Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe a su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que éstos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública”*.

En el caso bajo examen, el ciudadano **ISIDRO OLAYA** identificado con la C.C 93.348.538, se encuentra legitimado en la causa por activa para interponer la acción de tutela, en virtud del artículo 86 de la Carta Política y por ser la titular de los derechos invocados.

Por su parte, la legitimación por pasiva dentro del trámite de amparo hace referencia a la capacidad legal del destinatario de la acción de tutela para ser demandado, pues está llamado a responder por la vulneración o amenaza del derecho fundamental en el evento en que se acredite la misma en el proceso. En el asunto de la referencia, la acción se dirige contra una entidad de derecho público como es la UNP, que tiene dentro de sus funciones legales la de atender analizar el estado de riesgo de las personas y asignar las medidas de seguridad correspondientes; y además, (ii) la pretensión de la tutela está dirigida a que no se retiren las medidas de seguridad asignadas al accionante, concluyéndose existe legitimación en la causa por pasiva.

### **INMEDIATEZ**

De conformidad con el artículo 86 de la Constitución, la acción de tutela puede interponerse “en todo momento” porque no tiene término de caducidad.

La Corte Constitucional en Sentencia T-044/19 señaló, frente a este requisito: “El requisito de la inmediatez pretende entonces que exista “una correlación temporal entre la solicitud de tutela y el hecho judicial vulnerador de los derechos fundamentales”, de manera que se preserve la naturaleza de la acción de tutela, concebida como un remedio de aplicación urgente que demanda una protección efectiva y actual de los derechos invocados.

Sobre el particular es preciso señalar que la Resolución 00009393 de 2019 “por medio de la cual se adoptan las decisiones pertinentes conforme a las deliberaciones hechas por parte del Comité de Evaluaciones de Riesgo y Recomendaciones de Medidas -

CERREM”; tiene como fecha 2019-12-23; a su turno la Resolución 02047 de 2020 “por medio de la cual se resuelve un recurso de reposición”, tiene como fecha 13-04-2020,razones suficientes para considerar que el accionante dejó transcurrir un tiempo prudencial para impetrar la presente acción constitucional.

## **SUBSIDIARIEDAD**

El Decreto 2591 de 1991 establece expresamente que solo procede la tutela cuando “el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial”. Entonces, la procedencia de la acción se encuentra condicionada por el principio de subsidiariedad, bajo el entendido de que no puede desplazar los recursos ordinarios o extraordinarios de defensa, ni mucho menos a los jueces competentes en la jurisdicción ordinaria o contencioso administrativa.

El Despacho advierte que con la interposición de la tutela se busca la protección del **DERECHO FUNDAMENTAL A LA VIDA, LOCOMOCIÓN, SEGURIDAD PERSONAL DE LÍDERES SOCIALES** y es la vía que encuentra el accionante para asegurar su ejercicio.

### **Derecho Fundamental Invocado Como Vulnerado.**

En relación con la protección del **DERECHO FUNDAMENTAL A LA VIDA**, la sentencia T-1026 de 2002, señaló que “la vida constituye la base para el ejercicio de los demás derechos. Es decir, la vida misma es el presupuesto indispensable para que haya titularidad de derechos y obligaciones. La primacía e inviolabilidad de la vida le otorga a ésta una especial protección constitucional; su desarrollo en la Carta de 1991, como principio, como valor y como derecho, refleja la importancia que se le atribuye dentro del ordenamiento jurídico”.

Es así, que la órbita del derecho fundamental a la vida se divide en dos esferas de obligatorio cumplimiento para el Estado: en primer lugar, el deber de respetarla y en segunda medida la obligación de protegerla. Esta situación conlleva a que las autoridades públicas estén doblemente obligadas, a no vulnerar el derecho a la vida y a evitar que terceros lo afecten.

Por su parte, la sentencia T-981 de 2001, anotó que el Estado debe responder “a las demandas de atención de manera cierta y efectiva” cuando se tenga conocimiento de amenazas “sobre la existencia y tranquilidad de individuos o grupos que habitan zonas de confrontación o que desarrollan actividades de riesgo en los términos del conflicto”, por lo cual no es dado que el Estado pretenda incumplir con sus deberes, minimizando la realidad que afecta a ciertos grupos vulnerables y que requieren de especial protección por parte de las diferentes instituciones.(Sentencia T-473/18).

## **DERECHO A LA SEGURIDAD PERSONAL DE LIDERES SOCIALES**

Los líderes que demuestren que se encuentran en riesgo y que soliciten medidas de protección para salvaguardar sus derechos a la vida, la seguridad personal y libertad, deben recibir una atención especial y una pronta respuesta por parte del Estado con la finalidad de evitar que se consume el daño. Por esta razón, las entidades encargadas están obligadas a tomar en consideración, como un factor de la mayor pertinencia, la condición de sujeto de especial protección constitucional que ostenta el afectado. (Sentencia T-473/18).

## **DERECHO A LA LIBERTAD DE LOCOMOCIÓN.**

“El artículo 24 de la Constitución Política consagra el derecho a la libertad de locomoción en los siguientes términos, “todo colombiano, con las limitaciones que establezca la ley, tiene derecho a circular libremente por el territorio nacional, a entrar y salir de él, y a permanecer y residenciarse en Colombia”. A su vez, convenios y tratados internacionales han incorporado la libertad de locomoción, entre los cuales está la Declaración Universal de los Derechos Humanos (art. 13) y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (art. 12), que además prevé que este derecho no podrá ser objeto de restricciones a menos que (i) estén previstas en la ley y, (ii) sea necesario para la protección de la seguridad nacional, el orden o moral pública, la salud o los derechos y libertades de terceros.(Sentencia T-747/15).

## **PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA JURÍDICO.**

Corresponde a esta juzgadora determinar si la **UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN - UNP** vulneró los derechos de **A LA VIDA, LOCOMOCIÓN, SEGURIDAD PERSONAL DE LIDERES SOCIALES** del ciudadano **ISIDRO OLAYA** identificado con la C.C 93.348.538 al proferir la Resolución 00009393 de 2019, mediante la cual finaliza las medidas de protección y posteriormente la Resolución 02047 de 2020 por medio de la cual confirma la decisión.

Dentro de los hechos del plenario se establece que el ciudadano **ISIDRO OLAYA** identificado con la C.C 93.348.538 es líder social (Secretario Departamental de Derechos Humanos de ASTRACATOL, subdirectiva ASTRASAN –Asociación de Trabajadores Campesinos de San Antonio, Tolima), como prueba de lo anterior se allegó certificación expedida por la Asociación de Trabajadores Campesinos del Tolima – ASTRACATOL-, con fecha de expedición del 18 de agosto de 2020.

Obra epicrisis Unidad de cuidado Intensivo Adulto Meintegral SAS Chaparral, con fecha de ingreso del 22/02/2013 y fecha de egreso 02/04/2014 del que se lee:

“DIAGNOSTICO DE INGRESO: 1. CHOQUE SEPTICO DE ORIGEN ABDOMINAL.2. HERIDA POR ARMA DE FUEGO EN ABDOMEN.3. PERFORACIONES MULTIPLES EN INTESTINO DELGADO.4. POP LAPARATOMIA EXPLORATORIA ANASTOMOSIS DE INTESTINO DELGADO.5. FRACTURA CONMINUTA DE RADIO DERECHO”

Informe Pericial de Clínica Forense expedido por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses con fecha del 27 de marzo de 2019, nombre del examinado ISIDRO OLAYA VELASQUEZ de los hechos de relato se lee: “El examinado refiere que ME DISPARARON”.

Análisis, Interpretación y Conclusiones.

Mecanismo traumático de lesión: Proyectoil arma de fuego. Incapacidad médico legal PROVISIONAL NOVENTA Y CINCO (95) DÍAS. Debe regresar a nuevo reconocimiento médico legal al término de la incapacidad provisional, con nuevo oficio de su despacho. SECUELAS MEDICO LEGALES: Deformidad física que afecta el cuerpo por definir (...).

Consulta del caso noticia 731686000451201400092 del que se lee: “RELATO DE LOS HECHOS: EL DÍA 21-02-2014, LLEGA AL HOSPITAL SAN JUAN BAUTISTA DE ESTA LOCALIDAD EL SEÑOR OLAYA VELÁSQUEZ, QUIEN MANIFESTÓ EN SU MOMENTO QUE SIENDO LAS 19:30 EN EL SECTOR DEL RIO TETUAN, EN UN CAMINO DE HERRADURACUAN SE DIRIGÍA HACIA SU (...) UBICADA EN LA VEREDA PATALO FUE ATACADO CON UN ARMA DE FUEGO SIENDO IMPACTADO CUATRO OPORTUNIDADES DEJÁNDOLO GRAVEMENTE HERIDO(..)”.

Escrito dirigido a la comunidad chaparraluna, del 26 de febrero de 2014, de la que se lee (en lo pertinente): “Nosotros la comunidad educativa (...) manifestamos nuestra total indignación y rechazo frente a la agresión de que fue víctima el pasado 21 de febrero uno de nuestros miembros más activos y colaboradores el señor Isidro Olaya , quien al momento de desplazarse de la institución educativa luego de realizar algunos arreglos en la misma, fue abordado por personas inescrupulosas que atentaron contra su vida (...).”.

Acta de esquema de protección del 02 de abril de 2014, esquema compuesto por 1 escolta, chaleco.

Resolución 00009393 de 2019 -12-23 de la que se lee: (...) *Que de conformidad a lo indicado en el artículo 241235 del Decreto 1066 de 2015, modificado por el Decreto 567 del 2016, el caso del señor (a) ISIDRO OLAYA VELASQUEZ identificado (a) con cedula de ciudadanía No. 93348538, fue presentado ante el Grupo de Valoración Preliminar –*



*GVP; cuerpo colegiado que determino el nivel de riesgo como ORDINARIO, teniendo en cuenta que no se evidenciaron elementos que mostraran objetivamente situaciones que incrementaran el nivel de riesgo, como consecuencia directa del ejercicio de sus actividades o funciones, que conlleven a una situación de riesgo extraordinaria o extrema, tal como lo establecen los artículos 2.4.1.2.1 y el 2.4.1.2.6 del Decreto 1066 de 2015, modificado por el Decreto 567 de 2016, pues no se observó ninguna de las características que la Corte Constitucional señala que se deben tener en cuenta para que se configure un riesgo extraordinario y amenaza real, que compone la asignación de medidas de protección especiales.*

*Que el caso del señor ISIDRO OLAYA VELASQUEZ fue presentado ante el Comité de Evaluación de Riesgo y Recomendación de Medidas – CERREM – posterior a las actividades de campo recopilación y análisis de la información realizadas en el desarrollo de la reevaluación por temporalidad que le fue efectuada, en su condición de activista sindical (Secretaria Departamental de Derechos Humanos ASTRACATOL, subdirectiva ASTRASAN – Asociación de Trabajadores Campesinos de San Antonio) (...)*

*Que con fundamento en las actividades de verificación anteriormente indicadas , y pese a que el evaluado refiere intimidaciones por hechos acaecidos en el corregimiento la marina y una serie de llamadas que no profieren ningún tipo de amenaza pero que para el evaluado son extrañas, las autoridades consultadas no refieren ninguna información de denuncias, hechos o amenazas actuales en contra del evaluado, adicionalmente niegan la presencia de GAO y/o GAO en la zona y no se evidencia algún interés particular de un grupo al margen de la ley por pretender afectar al evaluado. Por lo anterior y con base en los criterios jurisprudenciales, no se observa riesgo concreto, presente o excepcional que advierta afectación a sus derechos fundamentales, de manera que no asume cargas adicionales que lo sitúen en un nivel de riesgo que no tenga el deber jurídico de soportar, por el contrario asume un riesgo ordinario, y en virtud del principio de igualdad ante las cargas públicas, deberá asumirlo y no podrá exigirle al Estado medidas concretas de protección.*

*Que la mencionada Evaluación y/o revaluación del Nivel de Riesgo fue validada en el escenario del Comité de Evaluación de Riesgo y Recomendaciones de Medidas – CERREM poblacional; celebrado en sesión del 4/12/2019 y en ejercicio de las funciones atribuidas en el artículo 241238 del Decreto 1066 de 2015, modificado por el Decreto 567 de 2016 y en particular la dispuesta por el numeral 6, recomendó:*

- a. Nombre: Isidro Olaya Velásquez*
- b. Cedula: 93348538*
- c. Población: 3.2 Activista Sindical*

- d. Cargo: *Activista Sindical; secretario departamental derechos humanos de ASTRACATOL; subdirectiva ASTRASAN (asociación de trabajadores campesinos de San Antonio) – Chaparral- Tolima, residente en el municipio de Chaparral – (Tolima).*
- e. (...)
- f. *Recomendaciones del CERREM: Realizar desmonte gradual de la siguiente manera: Finalizar un (1) vehículo convencional y un (1) de protección. Ratificar un (1) medio de comunicación, un (1) chaleco blindado y un hombre de protección por un término de tres (3) meses.*  
*g.Temporalidad: Las medidas de protección diferentes a las finalizadas tendrán una vigencia por tres (3) meses, a partir de la fecha en la cual quede en firme el presente acto administrativo.*

(...)

*Que de acuerdo con lo anterior, el Comité de Evaluación del Riesgo y Recomendación de Medidas – CERREM, valido el resultado del estudio de nivel de riesgo del señor ISIDRO OLAYA VASQUEZ identificado con cedula de ciudadanía No. 93348538 , conforme a la ponderación por parte del Grupo de Valoración Preliminar: en tal sentido, de acuerdo con lo establecido en el artículo 2.4.1.2.4.6 del Decreto 1066 de 2015, esta Unidad Administrativa Especial procederá a finalizar las medidas de protección de la que actualmente es beneficiario el mencionado”.*

Se adjuntó Resolución 02047 del 2020 la que resolvió: “Artículo 1. NO REPONER la Resolución No. 9393 del 23 de diciembre de 2019, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente acto administrativo”.

Con la contestación de la demanda allegada por la UNAP, se manifestó: “El caso del señor Isidro Olaya Vásquez, ha sido atendido en el programa de protección liderado por la Unidad Nacional de Protección, de acuerdo con lo estipulado en el Decreto 1066 de 2015 el cual rige el programa de protección, en su artículo 2.4.1.2.4.0.1, que establece el Procedimiento Ordinario para que las personas que sean parte de la población objeto del Programa de Protección accedan a medidas materiales de protección en caso de enfrentar un riesgo extraordinario o extremo, o cuando se requiera una revaluación del nivel de riesgo de la persona que ya es parte del Programa de Protección, al acreditar pertenecer a la población descrita en el numeral 3del artículo 2.4.1.2.6 del Decreto 1066 de 2015:“3. Dirigentes o activistas sindicales.

Conforme a lo anterior, la UNP en garantía a la vida e integridad personal del accionante, desde el 2014, ha implementado una serie de medidas de protección, de conformidad con los estudios de nivel de riesgo realizados por el por parte del Cuerpo Técnico de Recopilación y Análisis de la Información (En adelante CTRAI), teniendo como base la matriz de riesgo que ha arrojado el instrumento estándar

de valoración del riesgo individual el cual fue avalado por la Honorable Corte Constitucional mediante el Auto No. 266 del 01 de septiembre de 2009.

(...)

Año 2019 –2020. El estudio de nivel de riesgo del accionante se adelantó bajo orden de trabajo No. 355692 y una vez finalizado, el caso del accionante en aplicación al parágrafo 2 del artículo 2.4.1.2.40 del Decreto Ley 1066 de 2015, el cual establece que “El nivel de riesgo de las personas que hacen parte del Programa de Protección será revaluado una vez al año, o antes si existen nuevos hechos que puedan generar una variación del riesgo”, fue presentado ante el Grupo de Valoración Preliminar -GVP en sesión No.48 del 25 de noviembre de 2019, donde el riesgo fue ponderado como ordinario con una matriz disminuida de 42,22%, y posteriormente expuesto ante el Comité de Evaluación de Riesgo y Recomendación de Medidas-CERREM el día 04 de diciembre de 2019, el cual recomendó: “Realizar desmonte gradual de la siguiente manera: Finalizar un (1) vehículo convencional y un (1) hombre de protección. Ratificar un (1) medio de comunicación, un (1) chaleco blindado y un (1) hombre de protección por un término de tres (3) meses.”.

De lo anterior, se concluye que las medidas de protección del señor Isidro Olaya Vásquez se finalizaron por cuanto su nivel de riesgo varió, de ser ponderado con una matriz de 54,44% a una matriz de riesgo ORDINARIO de 42,22%, y en razón de ello la Dirección General de la Unidad Nacional de Protección acatando dicha recomendación expidió la Resolución No. 9393 del 23 de diciembre de 2019 frente a la cual fue interpuesto recurso de reposición, siendo confirmada mediante la Resolución No. 2047 del 13 de abril de 2020.

Dispone el artículo 2.4.1.2.4.6. Finalización de las medidas de protección. *“El respectivo Comité podrá recomendar la finalización de las medidas de protección, en los siguientes casos: 1. Por el resultado de la valoración de nivel de riesgo, si de este se concluye que la medida de protección ha dejado de ser necesaria o que no la amerita, en atención a la realidad del riesgo que pese sobre el protegido del programa”.*

En virtud de lo anterior, el actuar de la UNP se ha ceñido a las reglas que regulan la materia, sin poder considerar que por ello haya vulnerado los derechos invocados por el actor, pues en el presente caso, el actor fue evaluado por la Unidad Nacional de Protección y el Comité de Evaluación del Riesgo y Recomendación de Medidas (CERREM), en el periodo comprendido en 2019-2020; y dado el resultado de riesgo ORDINARIO de 42,22%, se expidió la Resolución 9393 de 2019, la que se encuentra debidamente motivada y resolvió finalizar las medidas de protección por parte de la UNP; decisión que además fue controvertida por el accionante, siendo confirmada por la accionada.

En vista de lo anterior, el Despacho no tutelara los derechos invocados por el actor, pues si bien, no se desestima la situación de riesgo de algunos líderes sociales, sindicales y defensores de derechos humanos, es requisito indispensable que se adelante el respectivo estudio del nivel de riesgo a fin de determinar la realidad fáctica que le asiste a cada uno en particular, y en dado caso, de presentarse hechos sobrevinientes que puedan variar su ponderación de nivel de riesgo; el accionante está facultado para solicitar la activación de la ruta ordinaria.

Por otra parte, la nulidad de la Resolución 00009393 de 2019 “por medio de la cual se adoptan las decisiones pertinentes conforme a las deliberaciones hechas por parte del Comité de Evaluaciones de Riesgo y Recomendaciones de Medidas - CERREM” y la Resolución 02047 de 2020 “por medio de la cual se resuelve un recurso de reposición”; que pretende sea declarada a través de la acción tutelar, no es procedente, debiéndose agotar por el interesado, las acciones judiciales pertinentes con las que cuenta, tornándose improcedente este mecanismo Constitucional, salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable, lo que se pasa a analizar.

En relación con los requisitos, para que proceda la acción de tutela como mecanismo transitorio la Corte Constitucional ha dicho:

*“La noción de perjuicio que trae el inciso 2° del numeral 1° del art. 6° del Decreto 2591 y que en su noción básica reproduce el inciso primero del art. 1° del Decreto 306 de 1992, contiene dos elementos que permiten su precisión, a fin de que su amenaza autorice el uso de la acción de tutela como mecanismo transitorio: el primero referido a su carácter “irremediable” y el segundo a que sólo pueda ser reparado en su integridad mediante “indemnización”. Se entiende por irremediable el daño para cuya reparación no existe medio o instrumento. Es el daño o perjuicio que una vez se produce, no permite retrotraer las circunstancias al estado anterior a la vulneración del derecho; y en este sentido debe tomarse la expresión “perjuicio irremediable”. El segundo elemento así lo viene a confirmar cuando predica que el daño, trátase de sus categorías moral ó material, que tiene bien acogidas la jurisprudencia colombiana de tiempo atrás, cuando de considerar la eventualidad del perjuicio irremediable se trata puede ser indemnizado en su integridad”. (Sentencia T-468, del 17 de julio de 1992)”.*

De acuerdo a lo anterior, y con base en los hechos y documentos obrantes en el trámite, la presente acción constitucional no pretende contener un perjuicio irremediable, pues el accionante no evidenció nuevos hechos por los que se infiera que se encuentra en riesgo más elevado de lo dicho en la resolución, conforme los estudios efectuados por el Comité de Evaluaciones de Riesgo y Recomendaciones de Medidas, contando en la actualidad aún con protección, de acuerdo al nivel de riesgo encontrado.

En consecuencia y conforme a lo ya expresado concluye este despacho Constitucional que no se está vulnerando derecho fundamental alguno, y no se probó que se utilizara

como mecanismo para evitar un perjuicio irremediable, encontrando que, al accionante se le ha respetado el debido proceso administrativo.

**EN MÉRITO DE LO EXPUESTO, EL JUZGADO TREINTA DE FAMILIA DE BOGOTÁ D.C., ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY,**

**RESUELVE**

**PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE** el amparo solicitado **ISIDRO OLAYA** identificado con la C.C 93.348.538 contra la **UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN - UNP** y el **COMITÉ DE EVALUACIÓN DE RIESGO Y RECOMENDACIÓN DE MEDIDAS – CERREM**, por las razones expuestas en esta providencia.

**SEGUNDO:** Contra el presente fallo procede impugnación por la vía jerárquica.

**TERCERO:** Remitir el expediente a la Honorable Corte Constitucional, para la eventual revisión del fallo de tutela, en caso de no ser impugnada dentro de los tres (3) días siguientes a su notificación.

**CUARTO:** Notificar esta decisión a las partes por el medio más expedito. Líbrense comunicaciones.

**NOTIFÍQUESE,**

**Firmado Por:**

**VIVIANA MARCELA PORRAS PORRAS**

**JUEZ**

**JUEZ - JUZGADO 030 DE CIRCUITO FAMILIA DE LA CIUDAD DE BOGOTA, D.C.-SANTAFE DE  
BOGOTA D.C.,**

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación:

**99c49b896daa1c16b743e96f5853322a2aa8f79222477b44c2ca3486f5733a6d**

Documento generado en 30/10/2020 06:37:52 p.m.

**Valide éste documento electrónico en la siguiente URL:**  
**<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>**